



VIOLENCIA - 1

Venezuela neoliberal y violenta

La sociedad venezolana presencia, llena de estupor y miedo, cómo las principales ciudades del país, especialmente la ciudad de Caracas, se están convirtiendo en el teatro de operaciones de una violencia social que raya en la locura. Los noticieros de los medios masivos de comunicación se encargan de reportar los terribles sucesos de esta violencia en un tono tan dramático y amarillista que nos envuelve a todos en una pesadilla paralizante. El tema ocupa de tal forma el interés colectivo que hasta logra un indiscutido primer lugar de las telenovelas. La urgencia de encontrar soluciones no admite dilaciones.

El vertiginoso crecimiento de este fenómeno nos coloca ante un dilema insoslayable: o pacificamos la convivencia urbana en Venezuela o nos desbocaremos irremediablemente hacia nuestra propia destrucción como colectividad humana. La respuesta no puede ser sino colectiva y en ella tanto el Estado como la sociedad civil tienen responsabilidades ineludibles y complementarias. No hacemos nada con alarmarnos frente a los casos estridentes que conmocionan a la opinión pública. Tampoco proponiendo soluciones desesperadas como la pena de muerte para los asesinos desalmados. La tarea es compleja y requiere poner al servicio de ella nuestras mejores energías creativas.

El meollo del problema

El meollo del problema de la violencia está en el tipo de sociedad que estamos construyendo. Vivimos la paradoja de una sociedad «neoliberal» en la que al mismo tiempo que se excluye violentamente de ella a las masas empobrecidas, se convoca a esas mismas mayorías al hedonismo, al consumismo, al individualismo y a la afirmación egoísta de cada quién. Esta sociedad ofrece, por una parte, alternativas que ella considera legítimas para la satisfacción de sus propuestas, alternativas que de acuerdo al modo concreto que asuman pueden legitimar la guerra de todos contra todos; y, por otra parte, inspira un proceso autodestructivo que es incapaz de limitar y contener; al proponer como fines fundamentales de la conducta humana los valores que predica y premia.

El antiguo populismo, insuficiente y perversamente tergiversado, ha sido sustituido por una política económica y social que ha acrecentado drásticamente los niveles de pobreza y ha reducido las oportunidades de bienestar social. El populismo rentista propio de Venezuela había que superarlo, no sustituirlo por unas relaciones tan individualistas, éticamente inhumanas, que derivaran en irresponsabilidad social.

En este cuadro la violencia social es perfectamente explicable. Existe una violencia estructural que segrega agresivamente a una gran parte de la población de los canales legítimos de acceso a las posibilidades que ella misma propone como modo exclusivo de realización humana. A ella se añade una violencia discursiva que invita, con igual agresividad, a no quedarse en esa «marginalidad», sino que, muy por el contrario, ofrece el imaginario y los estímulos adecuados para intentar saltarse impedimentos estructurales tan reales como sólidamente asentados.

La combinación de la violencia estructural y la violencia discursiva engendran la cultura de la violencia cotidiana. Expresiones típicas de la misma la constituyen las bandas de adolescentes en los barrios, que gracias a la droga y las armas pueden ofrecer a sus admiradoras, a sus familias y a sí mismos, lo que no se puede conseguir de ninguna otra forma. Expresión típica también son los medianos y grandes traficantes de drogas, ellos se convierten en los portadores de generosas posibilidades para los jóvenes, especialmente los de los barrios. En ese círculo tienen su papel los cuerpos policiales. Al participar también ellos de los negocios ilícitos de drogas y armas, asumiendo conductas violentas en las relaciones con los «ciudadanos», los legitiman y consagran. Si a ello sumamos la corrupción generalizada en las instituciones públicas que hacen del robo y el pillaje el modo social normal de acceso a los bienes y servicios disponibles, hemos juntado los ingredientes para que nazca, crezca y se reproduzca la violencia cotidiana y se oculten sus raíces y razones estructurales.

La violencia cotidiana ha llegado a configurarse como una sub-cultura con un estilo y un modo de vida de rasgos muy característicos. Los llamados «malandros» de las bandas de jóvenes y adolescentes en los barrios adoptan un esquema de comportamiento muy simple: todas las delicias que ofrece el mercado están a mi alcance gracias al negocio de la droga y al ejercicio de la fuerza mediante las armas. Matar, robar, agredir y atemorizar se convierte en un ejercicio normal, admirado por quienes los rodean y hasta sacral. La policía, a su vez, ejecuta las mismas prácticas contra los malandros y la población en general: también mata, roba, agrede, y todo ello llega a convertirse en una perversa normalidad. A nivel de los dirigentes sociales, no pocos responsables de las instituciones públicas igualmente roban, matan (o mandan a matar), agreden, participan del complejo negocio de la droga y ello se consagra como una práctica política. Abrir los ojos al problema de la violencia es disponerse a desnudar las bases que sustentan nuestra actual sociedad; su modo de producción y distribución de bienes, su régimen político y las conductas individuales y colectivas promovidas.

La puerta falsa

Por parte de los cuerpos policiales, principalmente, se viene proponiendo sistemáticamente dos tipos de soluciones. La primera consiste en dejar que los malandros de los barrios «se maten entre ellos». Aunque reconocen el peligro de que en medio de las refriegas puedan morir algunos inocentes, lo excusan como un mal menor comparado con el enorme beneficio de la eliminación mutua de esas «peligrosas alimañas antisociales». La otra solución son los «operativos» de represión masiva sobre los barrios y, de vez en cuando, sobre toda la ciudad. De esa forma se asusta y se amedrenta a toda la población con un indiscriminado castigo colectivo. Estas soluciones, además de sus resultados muy parciales y efímeros, son a todas luces una falacia porque en el fondo consisten en mantener y alimentar la misma situación de violencia que pretenden combatir.

Una defensa contra la violencia que sigue la lógica misma de los violentos, aunque se ejercite de otro modo, es la llamada «autodefensa organizada»: los mismos miembros de la comunidad se organizan para reprimir lo que perciben como agresión. Esta salida tiene el atractivo de que a la corta parece la única eficaz. A la larga, sin embargo, no es fácil escapar del espiral de la violencia, pues se busca combatirla en su propio lenguaje y con sus propias armas. Si los malandros, por ejemplo, matan a uno de la organización de defensa y los vecinos no responden con acciones mayores, se pierde toda capacidad de disuasión; por ese camino se multiplica la violencia inicial. En las urbanizaciones residenciales de los sectores de mayores recursos, la «autodefensa» consiste en costear los servicios de protección de compañías de vigilancia y seguridad. Esta modalidad se inscribe en la lógica «neoliberal» de que cada quien resuelva los problemas privadamente, sólo es accesible, en la práctica, a los minoritarios sectores pudientes, quedando nuevamente de manifiesto la injusta estructura social antes señalada.

Como recurso desesperado se propone acudir a la pena de muerte. Se piensa que si ella se aplica ejemplarmente podría constituirse en un poderoso disuasivo para aquellos que pretenden violar las normas establecidas (véase SIC nº 553, abril 1993 pags 98-100). Aquí sólo queremos recordar cómo la lógica de la pena de muerte está sustentada en el miedo al castigo y que de ninguna manera el acatamiento por parte de la sociedad a sus propias normas puede fundamentarse en el miedo y en la coacción.

Del individualismo privado al nosotros responsable

La solución de fondo al problema de la violencia social es cambiar los fundamentos, estructuras y motivaciones del actual modelo de sociedad. Así de grueso y de complejo hay que considerar el asunto para no llamarnos a engaños.

El cambio tiene que ir dirigido a constituir una sociedad solidaria, sustentada en un cuerpo social que se concibe como un «nosotros», integrada no por individuos que persiguen su exclusivo bienestar, sino por personas que reconocen a los otros como parte de sí mismas, animadas por una ética de la responsabilidad por lo colectivo, capaces de establecer relaciones sociales sostenidas en una economía que aproveche las diversas capacidades productivas y distribuya los bienes de forma que sea posible el bienestar de todos.

Para ello es necesario un Estado, que gracias a la participación democrática, puede hacer de la colectividad una «polis», es decir, un cuerpo orgánicamente autodirigido hacia la construcción de su futuro. Como fundamento de una nueva estructura de relaciones sociales es necesario producir una cultura por la que nos sintamos corresponsables de los recursos de la tierra y de la administración activa del bienestar colectivo.

Los primeros pasos

Al Estado le corresponde cumplir con su responsabilidad: asegurar la justa redistribución de los recursos sociales, especialmente a través de una eficiente red de servicios públicos a la que accedan todos los integrantes de la sociedad, especialmente los sectores empobrecidos.

La razón de ser del Estado es garantizar la seguridad colectiva, para lo cual se le reconoce el papel de dirimir los conflictos entre los ciudadanos y reprimir los delitos de acuerdo a una ley igual para todos. La reconstitución del sistema judicial, los cuerpos policiales y el sistema penitenciario, a través de los cuales se cumplen estos fines, no tiene por qué esperar el cambio radical de la actual estructura del sistema de relaciones sociales. Muy por el contrario, la reformulación de estas instituciones puede convertirse en un paso eficaz hacia el cambio global de la sociedad.

La policía debe desmilitarizarse y despartidarse para dar paso a la profesionalización de sus integrantes; la cual debe ir dirigida a minimizar lo represivo para especializarse en la «inteligencia», las buenas relaciones con la población y el castigo eficaz de los delincuentes. Una policía civilizada, preventiva y profesional puede garantizar a sus miembros unas condiciones económicas de vida y un prestigio social que estimulen su acción lícita y evite la tentación de reproducir los patrones de la violencia cotidiana.

En el mismo orden de ideas es necesario desarmar a la población. No podemos seguir permitiendo que los habitantes de las ciudades, pobres y ricos, estén armados para una guerra que no puede ser, entonces, sino entre ellos, fratricida. Por la enorme incidencia que tiene el tráfico de drogas en el aumento de la violencia cotidiana y en el uso de las armas, es urgente dismantelar su red de distribución. Una labor de inteligencia policial, apoyada en la presión social de los vecinos, puede dismantelar esa red si se cuenta con la decisión política y la ética social capaz de penalizar judicialmente a quienes se dedican a esa actividad, y con mayor rigor aún a los policías, jueces, funcionarios del Estado o padrinos políticos de cualquier nivel, alcahuetes de un cáncer que se come los núcleos vitales de la convivencia social.

El otro paso que hay que dar al mismo tiempo para caminar hacia la solución de fondo de la violencia social en Venezuela es asumir ciudadanamente el problema. Si la causa mayor de la violencia que padecemos es el exagerado individualismo sobre el que se sostiene esta sociedad, que invita a prescindir del otro para aislarse egoístamente en el propio disfrute, la respuesta que más nos acerca a la solución es constituir una responsabilidad compartida de todos los habitantes de la ciudad por su ciudad.

En concreto cada persona y cada grupo tiene que asumir la ciudad desde la parcialidad de ella en la que hoy circunscribe y aísla. Cada uno tiene que preguntarse por qué la convivencia urbana y sus instituciones políticas y sociales se han deteriorado, por qué mi ciudad y mi barrio se han convertido en un atentado contra la vida, por qué no existe justicia, ni derecho, ni ley, por qué no hay república. Correspondientemente cada uno tiene que exigirse su cuota de participación responsable en la solución con los correspondientes sacrificios que conlleva.

Asumir la responsabilidad ciudadana para enfrentar la violencia exige conjurar el miedo que nos sobrecoge y nos lleva a buscar solucionar cada uno por separado su propia seguridad, para construir la tranquilidad y la paz que deseamos como un «nosotros» solidario. Implica también ejercer una presión social sobre el colectivo en función de la convivencia armónica. Construir ciudadanamente la paz exige crear organizaciones con ese propósito y desarrollar acciones que manifiesten esa sensibilidad. Responsabilizarse como ciudadanos por la paz es también redimir a los violentos e integrarlos a la convivencia. Aunque esto último suene a música celestial, es parte de la lucha integral a favor de la paz y en contra de la violencia.

La educación es un instrumento clave e inagotable para alcanzar una sociedad justa que viva en paz. Educar para una convivencia cuya responsabilidad es compartida es una tarea urgente si de verdad queremos poner las bases culturales de una sociedad humana. Nuestro sistema educativo en lugar de solidificarse se ha ido debilitando. Nuestros maestros y profesores ya no son modelos de sabiduría, ni son socialmente estimulados en su difícil acción que deben realizar en malas condiciones físicas y recibiendo una indigna remuneración. Nuestras familias no cumplen cabalmente el papel de promover los valores de la comunicación entre sus miembros y la participación en las decisiones que las afectan. En las calles no hemos logrado generalizar un comportamiento que nos recuerde continuamente que éstas son del pueblo, que forman parte de mi ciudad, por tanto del ambiente en el que todo queremos vivir como personas.

La violencia cotidiana y estructural no es nuestro destino definitivo si nos decidimos a dar los primeros pasos que nos alienten en el complejo camino de humanizar nuestra convivencia. Todos y cada uno tenemos una responsabilidad y podemos hacer algo. Hagámoslo.